



Señores

**JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI**  
E.S.D.

**PROCESO No.** 001 202000126 00  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**DEMANDANTE:** **LIBIA CORTÉS ROSAS**  
**DEMANDADO:** MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS

**JAMITH ANTONIO VALENCIA TELLO**, mayor de edad, vecina de Cali, identificado con la C.C. No. 94.492.443, y T.P. No. 128.870 del C. S. de la J., actuando en calidad de Apoderado del Municipio de Santiago de Cali mediante poder debidamente otorgado, por medio del presente escrito procedo a dar **CONTESTACIÓN** en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

### **I. A LAS PRETENSIONES**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, y en consecuencia solicito amablemente, que previo el agotamiento del procedimiento respectivo, y analizadas las pruebas, se sirva absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte actora, por las razones a saber:

1.- la SEM solo cumple funciones administrativas, como quiera que el descuento a salud es realizado por la Secretaría de Educación como entidad nominadora, por nómina y debe ser girado a las cuentas recaudadoras del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, que la secretaria ninguna injerencia tiene sobre los valores que por ley son cobrados, luego, la SEM, tiene participación activa en los trámites de las prestaciones sociales de los Docentes, pero NO en las pretensiones invocadas, pues estas son competencia del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

2.- A partir del 27 de junio de 2003, se determinó que la cotización en salud para los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio debía ser del 12 %, ante la remisión normativa que hizo el art. 143 de la ley 100 de 1993, que regula la tasa de cotización para los servicios de salud de los pensionados.

Si bien, la ley 91 de 1989 creo el FONDO DE MAGISTERIO y dispuso que los docentes gozan de un régimen especial, el cual esta exceptuado del régimen general previsto en el la ley 100 de 1993 –art. 279-, dicha exclusión no es absoluta, así se desprende de la ley 812 de 2003, claramente el art. 81 de la ley consagra una remisión normativa relativa a la

cotización por los docentes afiliados al FOMAG, consistente en que el valor total de la cotización corresponderá a las sumas que para el efecto fije la ley 100 de 1993 y 797 de 2003.

Frente a la aplicación de la ley 812 de 2003 a los afiliados al fondo, la norma no hizo ninguna distinción respecto de la fecha de vinculación al servicio docente, luego, de conformidad con el art. 204 la obligación es cotizar el 12 % independientemente del cual fuera su fecha de vinculación al fondo -ley 1250 de 2008 que modificó el art. 204 de la ley 100 de 1993-.

3.- para la aplicación de la ley 71 de 1988 la actora debió pensionarse bajo los postulados de dicha normatividad en forma directa, de lo contrario, es claro que deberá someterse a la ley 100 de 1993 art. 14.

4.- en cuanto al reajuste pensional de conformidad con el incremento del salario mínimo, debe tenerse en cuenta, que no es posible afirmar con certeza cuál de los dos sistemas podría resultar más benéfico para el pensionado (IPC o SMLMV), ya que ello dependerá del comportamiento que presente cada uno de esos factores a través del tiempo, de manera que habrá ocasiones en que el **IPC SEA SUPERIOR AL PORCENTAJE EN QUE SE INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO**, y en otras, éste sea inferior a aquél, o pueden existir casos en que los dos sean iguales.

En efecto, el artículo 116 del Estatuto Tributario permitió al Gobierno Nacional equilibrar las pensiones que estaban en situación de desigualdad, por la existencia de dos regímenes diferentes consignados en las leyes 4a. de 1976 y 71 de 1988, pues si bien es cierto que esta última reajustó las mesadas pensionales con el 100% del porcentaje de incremento del salario mínimo legal mensual, **limitó su campo de aplicación sólo a aquellas pensiones que se causaran bajo la vigencia de esta ley.**

Además, resultaría desproporcionado que todas las pensiones aumentaran en la misma proporción que se incrementa el salario mínimo, ya que en Colombia se tienen pensiones considerablemente altas a cargo del Estado, cuyo aumento no significaría garantizar la dignidad del pensionado sino una carga presupuestal para la Nación.

Sobre este punto, la corte en sentencia C 387 de 1994 al estudiar el art. 14 de la ley 100 de 1993 en lo que toca con el incremento pensional, señaló que: *“ciertamente el artículo citado consagra un trato diferencial, mas no discriminatorio, en materia de reajuste de pensiones, pues quienes reciben pensión superior al salario mínimo legal mensual, tienen derecho a que se les reajuste ésta según la variación porcentual del índice de precios al consumidor; mientras que para las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo legal mensual, se les incrementa en la misma proporción en que se aumente dicho salario. Sin embargo, no se puede hablar de discriminación por que el reajuste pensional cobija a "todos" los pensionados sin importar la cuantía de su pensión”.*

*Para la Corte es evidente que ese tratamiento distinto ante situaciones iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás. En consecuencia, ha decidido el legislador que el valor de la pensión para esas personas se reajuste en un porcentaje*

*igual al del salario mínimo legal mensual, con el fin de que dicho ingreso conserve su poder adquisitivo y así pueda el beneficiario satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna.*

## **II. A LOS HECHOS**

En el presente asunto a la demandante le fue reconocida la pensión de jubilación a través de la resolución 951 del 20 de mayo de 2004, la cual según se desprende de la misma se ajustó a las previsiones legales, en la forma en que como se liquidó y se reconoció.

Es cierto que la parte actora el 27 de agosto de 2019, a través de la Secretaría de Educación solicitó el ajuste en el descuento a salud, ya que este debe ser del 5 % y no del 12 %, petición que fue resuelta mediante oficio No. 201941430200079911 del 04 de septiembre del 2019 en el que claramente se deja claro cuáles son las funciones de la SEM.

De manera que, respecto de los hechos materia del litigio, me atengo a lo probado en las diligencias, y en consecuencia solicito se tengan en cuenta las siguientes precisiones:

### **FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA**

#### **De las funciones de la SEM**

Para el régimen especial de prestaciones sociales de los docentes, a través de la Ley 91 de 1989 fue creado el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad encargada de administrar las prestaciones Sociales del personal afiliado a él, tal como lo regula el artículo 4º. del citado compendio el que dice:

**“Artículo 4.** El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del Artículo 2o, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos del requisito económico de afiliación. Los requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica”.

Así mismo el citado ordenamiento en su Artículo 3 dispuso:

**“Artículo 3.** Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.

El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad”.

La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.-FIDUPREVISORA S.A. Es una entidad eminentemente administradora y pagadora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con la Ley 91 de 1989.

La Secretaría de Educación procedió a cumplir con todos los protocolos que le corresponden, conforme al Decreto No.2831 del 2005, como es:

**ARTÍCULO 3°. Gestión. a cargo de las secretarías de educación.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.

Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá:

1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.
2. Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por ésta adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo,
4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la Ley.
5. Remitir a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que éstos se encuentren en firme.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Igual trámite se surtirá para resolver los recursos que sean interpuestos contra las decisiones adoptadas de conformidad con el procedimiento aquí establecido y aquellas que modifiquen decisiones que con anterioridad se hayan adoptado respecto del reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que el Fondo NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO es una cuenta especial de la Nación,

consistente en un patrimonio autónomo sin personería jurídica, los recursos del FNPSM no forman parte del patrimonio de la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., toda vez que esta actúa como administradora de dichos recursos en virtud de un contrato de fiducia mercantil celebrado con la Nación.

La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.-FIDUPREVISORA S.A. Es una entidad eminentemente administradora y pagadora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con la Ley 91 de 1989.

La Secretaría de Educación Una vez aprobado el proyecto de acto administrativo de reconocimiento del pago prestaciones sociales del magisterio se suscribe el Acto definitivo debidamente numerado y firmado por el Secretario de Educación Municipal, la que fue notificada al demandante.

Una vez ejecutoriado y en firme se debe remitir copia del Acto Administrativo junto con su constancia de ejecutoriado para el respectivo pago, a la sociedad FIDUCIARIA encargada de los recursos del fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En ese orden, la Secretaría de Educación sólo cumple las funciones administrativas de recepción y trámite, pues su función va hasta el proferimiento de los actos administrativos de reconocimiento y orden de pago de las diferentes prestaciones sociales, acatando lo dispuesto por la Fiduciaria, la SEM en el caso en comento, se basa en la hoja de remisión emitida por la entidad Fiduciaria, quien es la que hace el estudio y quien aprueba y paga las solicitudes y descuentos correspondientes.

### **Del incremento de la pensión conforme con el salario mínimo**

El artículo 48 de la Constitución Política de 1991, se refiere a la seguridad social como un "derecho irrenunciable" que se reconoce a todos los habitantes, y como un "servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley".

De manera que con apoyo en la Constitución Política, las pensiones, si bien continuaron siendo uno de los efectos de las relaciones de trabajo, también se configuran como parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, garantizado por el Estado y de regulación reservada al legislador bajo los principios establecidos en el artículo 48 constitucional.

Por su parte, el 19 de diciembre de 1988, se dictó la **Ley 71 de 1988**, según la cual las pensiones de que trata el artículo 1o. de la Ley 4a. de 1976, es decir las de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial y semioficial en todos sus órdenes y en el sector privado, así como las que paga el I.S.S., serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.

Este reajuste tiene vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo. Es decir que se toma como base del reajuste, el incremento anual del salario mínimo. Pero a diferencia del sistema imperante bajo la Ley 4a. de 1976, se fija como valor de reajuste el mismo porcentaje en que se incrementa por el Gobierno para el respectivo año, el

salario mínimo legal mensual a cambio del promedio entre los mismos salarios a que hacía referencia la norma últimamente citada.

En cuanto al monto de la pensión, la Ley 71 de 1988 dispuso que ninguna de ellas podía ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de 15 veces dicho salario, salvo lo previsto en la misma.

En cuanto concierne a la fecha en que los reajustes pensionales debían tener eficacia, esta ley la fijó a partir del 1o. de enero de 1989, como quiera que sus disposiciones únicamente podían entrar a regir en el momento en que fuera reajustado el salario mínimo.

Así entonces, de acuerdo con ese sistema, si el salario mínimo era reajustado por ejemplo en un 27%, en ese mismo porcentaje debía operar el reajuste de las mesadas pensionales.

Posteriormente, el artículo 116 del Estatuto Tributario permitió al Gobierno Nacional equilibrar las pensiones que estaban en situación de desigualdad, por la existencia de dos regímenes diferentes consignados en las leyes 4a. de 1976 y 71 de 1988, pues si bien es cierto que esta última reajustó las mesadas pensionales con el 100% del porcentaje de incremento del salario mínimo legal mensual, limitó su campo de aplicación sólo a aquellas pensiones que se causaran bajo la vigencia de esta ley, razón por la cual quienes seguían rigiéndose en esta materia por el sistema de la Ley 4a. de 1976, se encontraban en desequilibrio con respecto al reajuste anual de su pensión. Fue por ello que el artículo 116 mencionado, dispuso:

*"Artículo 116.- Ajuste a pensiones del sector público nacional. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año de 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1o. de enero de 1989.*

*Los reajustes ordenados en este artículo, comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo."*

Con fundamento en lo anterior, el Gobierno Nacional dictó el **Decreto 2108 de 1992**. Conforme a sus previsiones, las pensiones de jubilación del sector público nacional reconocidas con anterioridad al 1o. de enero de 1989 que presentaren diferencias con los aumentos de salario, se reajustaron a partir del 1o. de enero de 1993, 1994 y 1995, así:

1. Las pensiones reconocidas en 1981 y en fechas anteriores, se reajustaron en un 28%. Su pago se dividió en tres partes: el 12% a pagarse en 1993; el 12% en 1994 y el 4% restante en 1995.
2. Para las pensiones reconocidas de 1982 a 1988, se decretó un reajuste del 14% pagadero en dos partes: un 7% en 1993 y el otro 7% en 1994.

El Decreto 2108 de 1992 dispuso expresamente que estos reajustes eran compatibles con los incrementos decretados por la Ley 71 de 1988.

Finalmente, se expidió la **Ley 100 de 1993**, conforme a la cual la regla general es que, a partir de su vigencia, todas las pensiones se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero según la **variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior.**

En la exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, se hizo referencia expresa al principio de solidaridad, en estos términos: *"El proyecto busca ampliar el espectro de quienes tienen mayor capacidad contributiva y subsidiar a los trabajadores de menores ingresos a través de impuestos generales. Por esta razón, la solidaridad se produce no sólo entre asalariados, o afiliados al ISS y cajas de previsión, sino que incluye ahora a los rentistas de capital, a las empresas y, en general, a los grandes contribuyentes, para que por la vía de los impuestos se haga la redistribución y se permita garantizar, por parte del Estado, el cubrimiento de pensiones por lo menos iguales al salario mínimo a los afiliados de menores ingresos. Igualmente en desarrollo del principio de solidaridad, el Estado asume el valor de los bonos pensionales que habrán de expedirse a todos aquellos trabajadores que decidan trasladarse al nuevo sistema y que con anterioridad hubieren efectuado aportes a las entidades de previsión social. Dichos bonos, reconocerán a cada trabajador una suma superior a aquella que realmente aportó al antiguo sistema. Si se reconociera sólo el valor realmente aportado, ya no se alcanzaría a generar la pensión requerida, toda vez que las tasas de cotización que hasta ahora se han aplicado son insuficientes. De lo contrario se reconocería una pensión inferior a la que se prometió en el pasado".* (Gaceta del Congreso No. 87/92 pág. 15).

En Sentencia C 387 de 1994 la Corte señaló: *Por otro lado, tampoco halla la Corte que se lesione el inciso final del artículo 48 de la Constitución, porque allí no se establece el factor sobre el cual han de reajustarse las pensiones; simplemente se defiende al legislador la facultad de definir "los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante", precepto que guarda íntima relación con el artículo 373 superior, que ordena al Estado "velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda", labor que realiza a través del Banco de la República.*

En fallo de tutela (sent. T-230/94 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), sostuvo la Corte por medio de una de las salas de revisión de tutelas, que:

"La igualdad es un principio relacional en el que intervienen por lo menos dos elementos: las situaciones de hecho que se comparan y el criterio de comparación o 'patrón de igualdad' (también llamado 'tertium comparationi'). Las dificultades de interpretación pueden provenir del aspecto fáctico o del aspecto valorativo. En la primera de estas situaciones se presenta un problema de verdad o fáctico que debe ser resuelto con base en elementos probatorios empíricos. En la segunda, en cambio, el problema es de tipo normativo y debe ser solucionado a partir de algún método de interpretación que le proporcione sentido a los enunciados, de manera que la comparación de las situaciones concretas sea posible.

Esta segunda manifestación aparece sobre todo en aquellos casos en los que el patrón de igualdad no expresa un hecho comprobable empíricamente, sino un deber ser o un valor."

Y más adelante se refirió al tema del trato diferencial, el cual no se considera en sí mismo discriminatorio y señaló los requisitos que deben cumplirse para que dicho trato se justifique:

"(...) el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una discriminación siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada. Como se ve, cada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos -fáctico, legal o administrativo y constitucional- en la relación que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constitución).

(...)

Para que quien aplique el derecho justifique un trato diferenciado debe probar tres elementos: 1) empírico: que se trate de casos diferentes; 2) normativo: que exista un fin normativo que justifique racional y proporcionalmente la diferencia de trato y 3) valorativo: que la medida adoptada sea adecuada -razonable- a la luz de los principios y valores constitucionales."

El artículo 14 de la Ley 100 de 1993, consagra como regla general, el reajuste anual automático de las pensiones de invalidez, vejez o jubilación, y de sustitución o sobrevivientes, en los dos sistemas establecidos en el régimen general de pensiones (régimen solidario de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad), el cual deberá realizarse el primero de enero de cada año. De la misma manera, se establecen dos factores para efectos de determinar el valor del incremento correspondiente, a saber: el índice de precios al consumidor y el aumento del salario mínimo, cuya utilización depende del monto mensual de la pensión, así:

1. Si el valor de la pensión es mayor que el salario mínimo mensual vigente, el reajuste se hará de acuerdo a la variación porcentual del índice de precios al consumidor que certifique el DANE, para el año inmediatamente anterior.
2. Si el valor de la pensión es igual al salario mínimo mensual vigente, el reajuste se hará en el mismo porcentaje en que se incremente éste.

La corte en sentencia C 387 de 1994 señaló, respecto del aparte transcrito que:

Ciertamente el artículo citado consagra un trato diferencial, mas no discriminatorio, en materia de reajuste de pensiones, pues quienes reciben pensión superior al salario mínimo legal mensual, tienen derecho a que se les reajuste ésta según la variación porcentual del índice de precios al consumidor; mientras que para las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo legal mensual, se les incrementa en la misma proporción en que se aumente dicho salario. Sin embargo no se puede hablar de discriminación por que el reajuste pensional cobija a "todos" los pensionados sin importar la cuantía de su pensión.

Para la Corte es evidente que ese tratamiento distinto ante situaciones iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás. En consecuencia, ha decidido el legislador que el valor de la pensión para esas personas se reajuste en un porcentaje igual al del salario mínimo legal mensual, con el fin de



que dicho ingreso conserve su poder adquisitivo y así pueda el beneficiario satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna.

De manera que no es posible afirmar con certeza cuál de los dos sistemas podría resultar más benéfico para el pensionado -incremento igual al IPC o lo que incrementa el salario mínimo-, ya que ello dependerá del comportamiento que presente cada uno de esos factores a través del tiempo, de manera que habrá ocasiones en que el **IPC SEA SUPERIOR AL PORCENTAJE EN QUE SE INCREMENTE EL SALARIO MÍNIMO**, y en otras, éste sea inferior a aquél, o pueden existir casos en que los dos sean iguales.

Su señoría por todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente, se denieguen las Pretensiones de la demanda.

### **EXCEPCIONES**

**FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA:** hago consistir esta excepción debido a que, por disposición legal, las normas que determinan el reconocimiento y pago de prestaciones sociales del magisterio son del orden nacional y que el municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Educación no tiene competencia alguna en tales determinaciones.

En efecto, la Secretaría de Educación sólo cumple las funciones administrativas de recepción y trámite, pues su función va hasta el proferimiento de los actos administrativos de reconocimiento y orden de pago de las diferentes prestaciones sociales. La SEM, acatando lo dispuesto por la Fiduciaria, se basa en la hoja de remisión emitida por la entidad Fiduciaria, quien es la que finalmente hace el estudio y quien aprueba y paga las solicitudes y descuentos correspondientes.

**PRESCRIPCIÓN:** Sin que implique reconocimiento de derecho alguno de la validez de la acción, ni de derecho alguno a favor de la parte demandante, solicito comedidamente se tenga en cuenta que los derechos emanados de las acciones laborales prescriben a los tres (3) años, contados a partir de que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

**INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION:** No existe obligación por parte de mi representada en reconocer un ajuste a la pensión, sino se acreditan los requisitos legales para ello.

**BUENA FE:** Por cuanto la entidad que represento siempre ha actuado bajo criterios legales y constitucionales.

**COBRO DE LO NO DEBIDO:** Al no existir obligación alguna pendiente, las pretensiones de la demanda que presuponen el pago de un reajuste pensional, resultarían ser un cobro indebido.

**IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA CUMPLIR LO PRETENDIDO:** Las obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad, ya que operan sobre un plano real. Lo imposible, jurídicamente no existe; y lo que no existe no es objeto de ninguna obligación; por tanto, la obligación a lo imposible no existe por ausencia de objeto jurídico. En el caso de autos, es claro que, para poder reconocer un reajuste pensional, debe haber un fundamento real,

cual es el cumplimiento de los requisitos legales, mismos que no se encuentran acreditados.

**INNOMINADA:** al momento de proferir sentencia, se sirva declarar de oficio todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso del proceso y que resulten favorables a la entidad que represento.

### **PRUEBAS**

Como quiera que el presente asunto se trata de aquellos de pleno derecho, me atengo a las aportadas con la demanda, como quiera que es a la parte demandante a quien incumbe probar el supuesto de hecho que alega, conforme lo dispone el CGP.

Con todo, me permito indicar que como abogado externo no cuento con el expediente administrativo de la demandante, por lo que comedidamente solicito a su señoría, si a bien lo tiene, se sirva OFICIAR directamente a la SEM para que traslade los mismos.

### **ANEXOS**

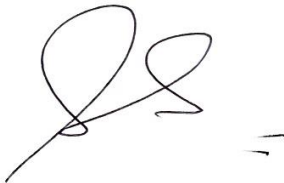
Honorable Magistrado la presente contestación la acompaño con:

- Poder para actuar
- copia de la escritura pública contentiva de dicho poder especial y de los documentos que prueban la elección y posesión del Señor Alcalde y el nombramiento y posesión de la directora jurídica de la entidad.

### **NOTIFICACIONES**

- Las del señor alcalde, se recibirán en el piso 9º del Centro Administrativo Municipal CAM – Torre Alcaldía. Correo electrónico [notificacionesjudiciales@cali.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co).
- El suscrito, en la Secretaría del Juzgado y el Centro Administrativo Municipal CAM - Torre Alcaldía piso 8º. – Secretaría de Educación Municipal, correo electrónico personal: E-mail: [jamithv@yahoo.com](mailto:jamithv@yahoo.com), [jamith.valencia@cali.edu.co](mailto:jamith.valencia@cali.edu.co)

Atentamente,



**JAMITH ANTONIO VALENCIA TELLO**

C.C. 94.492.443 de Cali

T.P. No. 128.870 del C. S. J.